

que pide el informe, porque en su concepto el Ministerio no ha hecho negativa espresa de las actas, sino que solo ha exigido que la Comision Permanente se apropie las opiniones de su secretario, para someter su peticion al acuerdo de S. E. el Presidente de la República. Para desvanecer esta equivocacion, me basta solo remitirme á los antecedentes que al principio de la sesion han sido leidos á indicacion del H. señor Derteano.

Existen pues en el expediente dos notas del señor Ministro de Gobierno. En la primera se niega clara y espresamente á remitir á este cuerpo las actas de Senadores existentes en su despacho y peditas por vuestro secretario. En la segunda, dice á lo mas, que cuando la Comision Permanente haga suyas las razones de su secretario, entonces las someterá al acuerdo de S. E. En esta segunda comunicacion es pues solo en la q' el Sr. Ministro se digna conceder una especie de aplazamiento, pero insistiendo siempre en su negativa anterior hecha á vuestro secretario con trasgresion de la ley de elecciones y del artículo 59 del reglamento.

Probablemente el H. señor Lizarraga no atendió á la lectura de la primera nota del señor Ministro, en la que, vuelvo á repetir, dice á vuestro secretario de un modo claro, espreso y abierto, que no remite ni debe remitir á la Comision Permanente las actas peditas porque (en su creencia) solo debe remitirlas al Senado. Siendo esto así, y estando manifiesta la negativa del señor Ministro, es tambien consiguiente el derecho que tenemos de dirigir la primera representacion.

En la segunda parte de su argumentacion, ha manifestado el señor Lizarraga, la creencia que tiene de que todas las actas duplicadas, que de los departamentos se remiten al Ministerio, deben quedar archivadas allí; pero con solo revisar los artículos de la ley de elecciones referentes á la remision de actas, se verá que está equivocado su Señoría. En todos y cada uno de esos artículos se encuentra, que el Ministerio no es sino el organo de seguridad para transmitir á los cuerpos escrutadores las actas duplicadas de elecciones, que le remiten los colegios electorales.

Así sucede con las actas duplicadas de la eleccion de Presidente y Vice-presidente de la República, que el Ministerio solo las retiene hasta que se reuna el Congreso, á quien las pasa para q' haga el escrutinio, regulacion de votos y proclamacion de los electos. Así sucede con las actas de la eleccion de diputados y Senadores, que el Ministerio solo las conserva como en depósito hasta que se reunan las Cámaras legislativas, á quien las remite para que se ocupen del escrutinio y regulacion de votos. Nunca pues quedan ni deben quedar archivadas las actas en el Ministerio; y si este siempre ha sabido remitirlas, lo propio debe hacer ahora que la comision Permanente tiene que ejercer la atribucion de hacer el escrutinio y regulacion de votos y proclamacion de Senadores, porque le es indispensable á este cuerpo, tener á la vista esas actas duplicadas, para hacer la respectiva confrontacion con las que directamente le fueron remitidas y ver si estan conformes unas con otras, ó si ha habido suplantacion en alguna de ellas.

En seguida fué aprobado por 7 votos contra 6.

Se puso en debate el dictámen del señor Za-

rate sobre la resolucion pedida por el Gobierno acerca de las municipalidades duales, y que habia sido retirado en la sesion anterior.

El señor Zarate, cambiando la parte dispositiva de su anterior dictámen, opina: que la comision se declare incompetente para expedir la resolucion pedida por el Ministerio.

Fué aprobado por unanimidad; y en seguida se levantó la sesion.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 17 de Diciembre.

Presidencia del señor Delgado.

Se abrió la sesion á las dos de la tarde, con 14 señores, y se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta y mandó pasar á la comision especial la solicitud de D. Maximo Navarro, diputado por Lucanas, acompaňando un certificado y una acta de aquel colegio, como documentos que se deben tener presentes al calificar las actas de esa provincia. Se mandó pasar á la comision especial.

Se dió cuenta de haber recibido las actas de Yauyos y Loreto. Se pasaron á la comision encargada de ese trabajo.

Se dió cuenta y pasó á la órden del dia el del H. señor Lavalle, relativo á la nota del señor diputado Astete, pidiendo se haga la 1ª representacion al Ejecutivo por la infraccion cometida por el señor Ministro de Hacienda, de la ley de 2 de Agosto de 1856, al negarse las cópias de unos documentos que pidió.

ORDEN DEL DIA.

Se puso en debate el siguiente dictámen.

Señor:

Honrado por vuestra confianza con el delicado encargo de abrir dictámen en la cuestion promovida por el H. señor Diputado D. Luis German Astete, á fin de que dirijieseis una representacion al Supremo Poder Ejecutivo, sobre una infraccion de ley cometida, en su concepto, por el H. señor Ministro de Hacienda, he procurado proveerme de todos los datos necesarios, y adquirir todas las luces conducentes al mejor desempeño de mi encargo: cúmplolo hoy, emitiendoos lealmente mi opinion, que si es errada, cosa posible y natural, será por culpa de la cortedad de mis alcances, no por perversion de mi voluntad.

Con fecha 17 de Octubre se dirigió á esta H. corporacion el indicado señor Astete, esponiendo: que habiendose dirigido en el mes anterior á la Direccion General de Hacienda, con el objeto de que se le permitiese tomar una razon exacta de las cantidades libradas por conducto del ministerio de Hacienda, contra las casas consignatarias del huano, el jefe de esa oficina se negó á acceder á su solicitud, mientras no contestase el señor Ministro de Hacienda á la consulta que con ese objeto le dirijia: el señor Ministro de Hacienda contestó, ordenando que no se diesen los datos pedidos, en atencion á que el señor Astete no estaba en el ejercicio de sus funciones legislativas; y, entonces, el señor Astete se dirigió directamente al señor Ministro, manifestandole el error en que, á su juicio,

incurria; mas, como sus varios oficios no obtuviesen contestacion, decidió presentarse á la comision, á fin de que esta representase al Ejecutivo, por la infraccion que se cometia de la ley de 9 de Agosto de 1856.

Este oficio del señor Astete, os dignasteis pasarlo á mi comision, con fecha 19 del mismo mes; y, mi primer cuidado fué, naturalmente, examinar la ley que el señor Astete creia violada. Esta ley que se registra en el número 11, tomo 31 de «El Peruano», y en el tomo 1, pagina 307, de la «Coleccion de Leyes» de Oviedo, es testualmente como sigue:

« República Peruana—Secretaría de la Convencion Nacional—Lima, á 9 de Agosto de 1856.

« Señor Ministro de Estado del despacho de Gobierno.

Señor Ministro.

« La Convencion Nacional en sesion de 22 de Julio último, tuvo á bien resolver: que en todas las oficinas del Estado se franqueen copias autorizadas de los documentos que pidan los Representantes de la Nación. Lo que tengo el honor de participar á U. S. para su conocimiento y fines consiguientes.

« Dios guarde U. S.—José Luis Quiñones.
« Pío B. Meza.»

Conocida una vez la ley de cuya infraccion se quejaba el señor Astete, era necesario al que suscribe resolver tres cuestiones, antes de emitir mi opinion:

1a. La de cerciorarse oficialmente de la exactitud de los hechos establecidos por el señor Diputado querellante, en su oficio de 17 de Octubre.

2a. La de conocer las razones que habian obligado al señor Ministro de Hacienda, para negar á aquel los datos pedidos.

3a. La de formar su conciencia sobre la naturaleza del documento transcrito, cuyo caracter de ley no se presentaba claro á su inteligencia.

Para resolver la primera, pedí con fecha 26 de Octubre y por conducto de vuestra secretaría, informé al señor Ministro, y, por su organo, al señor Director General de Hacienda. Este funcionario espuso con fecha 28 que: habiendo pedido varios individuos particulares, noticias referentes á la hacienda pública, á la oficina de su cargo, consultó al Ministerio la conducta que debia observar, y se le contestó, que procediese conforme á las leyes y en particular, á lo que dispone en su segunda parte el artículo 191 del Código Penal: que, con esta restriccion, no pudo acceder sin nueva consulta, al pedido que le hizo en 22 de Setiembre el H. señor Astete; y, que habiendolo hecho así, se le previno contestase á este señor, que el Ministerio no reconocia en el, el caracter necesario para pedir esos datos en receso del Congreso: que, en cuanto á la infraccion de que el señor Astete se queja, la direccion no habia encontrado en su archivo ni en el periodico oficial, mas documentos de la Convencion relativos á la exhibicion de datos, que

una nota de los señores secretarios de ese cuerpo, que carecia de los requisitos prevenidos en los artículos 76 y 77 de la Constitucion para tener el caracter de ley. El señor Ministro de Hacienda ofició con fecha 29, manifestando que: bastaba lo expuesto por el señor Director General de Hacienda, para reconocer que la ley de cuya infraccion se quejaba el señor Astete, no era tal ley; y, que no siendo ley, no podia haber sido infringida: que, aunque fuese tal ley, tampoco habria habido infraccion, porque pidiendo el señor Astete copias autenticas de las letras jiradas contra los consignatarios del huaró, desde la inauguracion de la administracion anterior, y estando publicada la razon de ellas en el periodico oficial, allí tenia las copias mas autenticas que apetecer podia: que insistir en su pedido era un contrasentido, una exigencia innecesaria, un insulto flagrante, un avance incommensurable.

Ratificada la verdad de los hechos asentados por el señor Astete, y conocidas las razones que habian obrado en el señor Ministro para negarse á su solicitud, restaba solo por aclarar el tercer punto, que, oido el señor Ministro y el señor Director de Hacienda, se presentaba mas oscuro aun al infrascripto: este era—la naturaleza del documento citado por el señor Astete, y al que esos altos funcionarios negaban el caracter de ley. Al intento pidió á la Secretaría de la Cámara de Diputados, todos los antecedentes relativos á la resolucion de 22 de Julio de 1856, comunicada en 9 de Agosto; y al Ministerio de Gobierno, que informase sobre el curso que se habia dado á la comunicacion de los secretarios de la Convencion, y remitiese á la comision el orijinal de dicho oficio. De los antecedentes que suministra la Secretaria de la Cámara de Diputados resulta: que en la sesion del 21 de Julio de 1856, el señor Diputado D. Juan C. Caverro presentó la siguiente proposicion.

« En todas las oficinas del Estado se franqueen copias legales de los documentos que piden los representantes de la nacion.»

Dispensada de todo trámite y admitida á discusion, fué aprobada en la sesion del 22. Despues no se vuelve á hacer mension en ninguna parte de dicha proposicion, y solo por el libro copiadur de comunicaciones consta, que se transcribió al Supremo Gobierno con fecha 9 de Agosto; quedando registrada en dicho libro, y no en aquel en que se registran las leyes y resoluciones. El señor Ministro de Gobierno expone con fecha 7 de Noviembre, que: la indicada nota se publicó, sin trámite ninguno, en el número 11, tomo 31 de «El Peruano»: que el original habia desaparecido del archivo; pero que, cómo las publicaciones hechas en el periodico oficial merecen entera fé y producen por su autenticidad los mismos efectos que los documentos orijinales, bastaba esa publicacion para los fines para los que la deseaba la comision.

No fueron bastantes los datos suministrados por la Secretaría de la Cámara, ni por el Ministerio de Gobierno, para formar mi conciencia sobre la naturaleza del oficio de 9 de Agosto, en cuya exacta definicion estaba el nudo de la cuestion sobre la que debia informar: observaba por un lado, que el señor Director de Hacienda decia, que cuando consultó al Ministerio sobre la peticion del señor Astete, se le previno contestase, que el Ministerio no reconocia al receso del Congreso, facultad en el se-

ñor Astete para pedir la *cópia que apetecía*, lo que manifestaba, que cuando el señor Ministro ordenó se negasen dichos datos al señor Astete, no fué por que desconociese la vigencia de la ley bajo cuyo amparo los pedía, sino únicamente la exteñcion de esa facultad á los diputados, durante el receso del Congreso: que el señor Director, al negar al oficio de 9 de Agosto su caracter de ley; y el señor Ministro al aceptar y ratificar la opinion de la Direccion, lo hacian fundandose, en que ese oficio carecia de los requisitos prevenidos en los artículos 76 y 77 de la Constitucion, lo que es absurdo, pues mal pueden aplicarse las reglas prescriptas en la Constitucion promulgada en Noviembre de 1860, á una ley dada en 1856: notaba por otro lado, que aun cuando la proposicion que dió margen al oficio en cuestion, habia sido presentada, discutida y votada en la forma acostumbrada para las leyes y resoluciones lejislativas, ni su redaccion habia sido sometida á la aprobacion de la Convencion, ni estaba redactada en forma de ley, ni dirigida al jefe del Poder Ejecutivo, ni registrada por último en el libro de las leyes y resoluciones, sino en el copiadore de comunicaciones: reconocia por otra parte, que los cuerpos de la naturaleza de la Convencion, no pueden expedir resolucion ninguna que no sea una ley; y en tal perplejidad, en tal lucha de argumentos y de razones favorables unas y adversas otras á la fuerza legal de la comunicacion de 9 Agosto, confieso sin rubor, pues no lo debe haber en reconocer cada uno su incapacidad y su ignorancia, cualquiera que sea el puesto que ocupe, confieso sin rubor, repito, que no me encontré con la ilustracion suficiente, para resolver por mí mismo, tan delicada cuestion. Crei que ninguno seria mas á proposito para ilustrar mi ignorancia, que cualquiera de los señores Fiscales de la Corte Suprema, magistrados destinados á ayudar al Poder Ejecutivo mismo, en las mas árdnas cuestiones de la administracion; y al intento, me dirijí con fecha 12 de Noviembre al H. señor Secretario de la comision, á fin de que remitiese el expediente formado con todos los documentos que llevo indicados, al señor Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de que este alto funcionario emitiese su opinion sobre la cuestion siguiente: «La resolucion tomada por la Convencion Nacional en 22 de Julio de 1856, y comunicada al señor Ministro de Gobierno en 9 de Agosto del mismo, ¿es ó no ley del Estado?» No ignoro que este paso ha sido motejado, ya porque era trámite inusitado en los cuerpos lejislativos, ya porque en estos cuerpos se supone toda la ciencia necesaria para resolver toda clase de cuestiones; pero ¿qué buscamos nosotros? el acierto sin duda: yo creia encontrarlo guiado por el Fiscal de la Suprema, y ocurrió á él: no me arrepiento de haberlo hecho, y lo haré siempre que en situaciones semejantes me halle.

El señor Fiscal de la Corte Suprema expidió su vista con fecha 30 de Noviembre y en ella manifiesta: que la fuerza obligatoria de la ley de 9 de Agosto de 1856, no depende de las formalidades prescriptas en la Constitucion de 1856, ni en la de 1860, pues fué anterior á la sancion de una y de otra: que cuando la Convencion sancionó dicha ley, no reja mas ley fundamental que el Estatuto provisorio, en el que nada se ordenó acerca de las formalidades con que se expedieran las leyes y resolu-

ciones de la Convencion: que en el Estatuto se detallaron únicamente las atribuciones y restricciones del Presidente Provisorio y se declararon las garantías de los ciudadanos, quedando la Convencion en el pleno ejercicio del poder para reorganizar y constituir la república, segun la declaracion solemnemente de 14 de Julio: que con esa omnipotencia lejislativa, fué dictada la resolucion del 22 de Julio de 1856, la cual tiene fuerza de ley porque emana de una potestad, no solo lejislativa sino constituyente: que nada importa la forma, pues no habia prescripto ninguna la Convencion Nacional: que esa forma era la adoptada para comunicar las desiciones que pertenecian al regimen administrativo, y en la misma se comunicaron otras muchas: que desde que el Ejecutivo no la observó, dicha resolucion adquirió fuerza de ley, y fué obligatoria á todas las autoridades respectivas y á las oficinas de Hacienda, sin necesidad de que se le dirijiesen nuevas cópias; pues tales son los efectos de las publicaciones hechas en el periodico oficial: que, por último, antes de ahora nadie habia dudado de que la resolucion del 22 de Julio tuviese fuerza de ley, y que como tal la reconocia el Fiscal.

Ante un cúmulo de razones tan poderosas, emitidas por una autoridad tan respetable como la del señor Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema, no solo por su saber é ilustracion, sino por haber pertenecido y presidido la Convencion Nacional, conociendo, por consiguiente practicamente el sistema que en ella se observaba, no era posible la duda, y el que suscribe reconoció que el oficio de 9 de Agosto de 1856 era ley del Estado.

Mas, reconocida una vez dicha resolucion como ley del Estado, pudiera decirse que no comprendia á los representantes de la nacion durante la clausura del Congreso, asi como las prerrogativas que les concede la Constitucion en su artículo 55, título VIII no son mas que por el tiempo que duran las sesiones y treinta dias despues. Pero tal objecion apenas merece la pena de mencionarse de paso; pues si la ley hubiera querido que asi fuese, lo hubiese dicho, como lo dice la Constitucion respecto á las inmunidades constitucionales; pero no lo dice: habla solamente de *representantes de la nacion*: estos lo son mientras dura su mandato, luego mientras dura su mandato estan en el pleno goce del derecho que les concede la ley de 9 de Agosto de 1856. Restringirse derecho á solo mientras duren las sesiones del Congreso, seria interpretar la ley, y esa interpretacion, diré mejor, esa modificacion, solo la puede hacer el Congreso: á la comision toca únicamente, exigir el exacto cumplimiento de las leyes, tales cuales existen.

Reuniendo todo lo expuesto aparece: que la resolucion de 9 de Agosto es ley del Estado: que comprende á los representantes de la nacion, esten en actividad ó no lo esten: que en mérito de lo dispuesto en ella, el H. señor Astete pidió cópia de unos documentos á la Direccion de Hacienda: que esta oficina se los negó por prevencion del Ministerio, y que todo esto importa una violacion flagrante de la indicada ley. Una vez establecida asi la cuestion, mi deber me obliga á opinar,—que en ejercicio de la atribucion la., artículo 107, título XIII de la Constitucion dirijais al Ejecutivo la primera representacion, sobre la infraccion cometida por el señor Ministro de Hacienda, impidiendo que la Di-

racion General del Ramo proporcione al H. señor Diputado por la provincia de Huaraz los documentos de que ellas solicita, en ejercicio del derecho que le concede la ley de 9 de Agosto de 1856.

Salta de la comision en Lima á 15 de Diciembre de 1863.

J. A. de Lavalle.

El señor *Lizarraga*.

Señor:

Yo tambien, siguiendo el ejemplo del H. señor Santisteban, debo dar la razon que tengo para dar mi voto en favor del dictámen emitido por el H. señor Lavalle.

Para mí poco ha importado que la nota de los secretarios de la Convencion Nacional carezca de las formas de que está revestida toda ley general para que se le dé cumplimiento por los jefes de las oficinas de hacienda: lo que ha importado es, que aquella nota no es mas, que la espresion jenuina de uno de los mas sagrados principios de la constitucion, el de la publicidad, porque nada debe ser misterioso en el sistema republicano, y las operaciones de los Ministros de Estado, especialmente del de Hacienda, deben estar al alcance de todos, y mucho mas de un representante de la nacion que asegura necesitarlas para el buen desempeño de ese cargo.—El Ministro de Hacienda no ha debido olvidar, que el poder judicial tiene el deber de dar publicidad á sus sentencias, y que el Poder Legislativo ha establecido un Diario de Debates para la publicidad de sus sesiones; lo mismo debe hacer el Poder Ejecutivo prestandose á que se franqueen cópias de sus acuerdos, y mas desde que la tesoreria no publica la razon de ingresos y egresos, como se hacia antes, y está mandado por resoluciones vijentes.

El señor *Santisteban*.

El asunto es tan grave que merece los honores de la discusion; pero el dictámen es tan luminoso que viene á eximirnos de ese deber: en el ha manifestado claramente el H. señor Lavalle, con la lucidez y el talento que le distinguen, que todas las resoluciones de un cuerpo legislativo son leyes.

Las formalidades son indispensables es cierto para la existencia de la ley; pero la Convencion expidió esta resolucion antes de determinar las formas con que debian darse las leyes: luego en la esencia esta resolucion no puede dejar de ser ley por falta de formalidades. La consecuencia es perfectamente lógica; por consiguiente, creo que es un deber de la Comision Permanente el aprobar el dictámen.

Cerrado el debate, fué aprobado el dictámen por unanimidad; y en seguida se levantó la sesion.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 21 de Diciembre.

Presidencia del señor Delgado.

Abierta la sesion á las dos de la tarde, con 10 señores, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta y fueron aprobadas las redacciones de las representaciones siguientes:

1ª. La dirigida al Ministerio de Gobierno y de Hacienda la 1ª representacion por haberse infringido el artículo 66 de la ley de elecciones, negando la competencia á la comision para pedir las

actas de los colegios electorales de provincia para el examen, escrutinio, regulacion y proclamacion de Senadores:

2ª. Al señor Ministro de Hacienda por haber infringido la ley de 9 de Agosto de 1856, negando al H. señor Diputado por Huaraz D. German Astete, se le diesen por la Direccion de Hacienda cópias de las letras jiradas contra los consignatarios del huano.

Se dió cuenta de haberse recibido las actas de Janja, Acomayo, Cercado de Huancavelica, Huanta, Cotabambas, Paruro, Cercado del Cuzco y Aymaraes, con la circunstancia de ser dobles las de Janja, Huanta, Aymaraes; y no habiendo otro asunto de que tratar se pasó á sesion secreta.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 4 de Enero.

Presidencia del señor Delgado.

Abierta la sesion á las dos de la tarde, con 10 señores, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta de las siguientes notas:

1ª. Del señor Ministro de Hacienda, en la que comunica que el Director del Diario de Debates D. José A. Rodulfo, que se habia puesto á disposicion del gobierno durante el receso de las Cámaras, habia sido nombrado encargado de negocios ad hoc, en el Reyno de Beljica, durante la licencia concedida al D. D. Manuel Irigoyen.

2ª. Del señor Ministro de gobierno policia y obras públicas en la que pide la reconsideracion de la resolucion tomada por la Comision Permanente haciendo, en uso de la atribucion la. del artículo 107, la primera representacion al Poder Ejecutivo, para que se enmiende la infraccion cometida por dicho Ministerio del artículo 66 de la ley de elecciones, negandose á remitir las actas de los colegios electorales, para proceder al examen, escrutinio, regulacion y proclamacion de los senadores.

El señor *Chavez*.

Esta nota tiene la falta de no estar rubricada por S. E. el Presidente de la República como es de practica en esta clase de documentos, lo hago presente en cumplimiento de mi deber.

El señor *Cardenas*.

A pesar de que el Ministerio ostenta tanta imparcialidad en las cuestiones electorales, cuando habla; cuando obra, en mi concepto, prueba todo lo contrario. Esta misma nota, para mí, es otra prueba de que el Ministerio procede en este asunto con parcialidad. En el fondo está de acuerdo con la Comision; conviene en mandar las actas. Pero se preocupa de cuestiones de mera fórmula; entabla cuestiones de forma para conseguir una tregua; perturbando entre tanto el orden constitucional. Ha impedido así el establecimiento de las nuevas corporaciones municipales, que ya debian estar funcionando. Aquí hay un plan preconcebido por el Ministerio. Debemos resolver este asunto pronto para cruzar ese plan; porque así lo exige la ley. Consulte V. E. á la Comision.

Consultado si devolvería esa nota se acordó que no se devolviese.

3ª. Del señor Ministro de Hacienda manifes-